

mano de obra. Estos cambios significaron una profunda redistribución del poder en el lugar de trabajo.

Además, la nueva alianza con el Estado desempeñó un importante papel en la propia organización de la clase trabajadora. La expansión de los convenios colectivos requirió contar con sindicatos bien organizados, lo que a su vez estimuló una mayor sindicalización de los trabajadores. La cantidad de afiliados creció más del 370% entre 1945 y 1950. Con el ingreso de nuevas entidades representativas de la mayoría de las ramas de actividad, la CGT alcanzó algo parecido a la unificación de todo el arco trabajador. Imbricado con el Estado y con el peronismo, para 1955 la Argentina tenía uno de los movimientos obreros más poderosos del mundo.

El ascenso a esa posición, sin embargo, tuvo sus costos. El enorme crecimiento cambió profundamente la vida interna de la mayoría de las entidades gremiales. El tamaño, junto con la creciente complejidad de sus tareas, hizo indispensable la multiplicación de los cargos rentados no electivos. Además de sus funciones tradicionales, los sindicatos pasaron a ocuparse de gran variedad de cuestiones relativas al bienestar obrero, como la provisión de alimentos baratos, servicios turísticos y de sanidad, etcétera. Además, las complejas negociaciones colectivas requirieron un cuerpo de asesores legales y técnicos. En fin, una burocracia sindical más o menos extensa que comenzó a tener un peso propio en las decisiones internas. Los dirigentes —ahora una clase profesional que cumplía funciones de tiempo completo— se distanciaron progresivamente de la vida cotidiana de los trabajadores comunes. La democracia de base se volvió más bien la excepción.

Menos autónomo pero a la vez más poderoso, más alejado de las bases pero con mayor capacidad de movilización, el movimiento obrero ocupó un lugar central y de peso propio dentro del peronismo y, como parte de esa alianza, en la realidad del país.

El primer gobierno de Perón (y Evita)

La victoria de 1946 se verificó en todos los distritos, salvo en Corrientes. Eso le dio a Perón algo que Yrigoyen no había tenido: mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y el control de la de Senadores, donde el oficialismo llegó a ocupar la totalidad de las bancas. En las elecciones

subsiguientes el peronismo osciló en torno del 60% de los votos, lo que le permitió sostener y ampliar esas representaciones. Con eso pudo desactivar la capacidad contramayoritaria de la Corte Suprema integrada por liberal-conservadores, que desde el comienzo se había dedicado a bloquear las medidas oficiales: mediante un veloz juicio político quedó casi totalmente renovada.

Despejados los obstáculos políticos e institucionales, Perón tuvo las manos libres para ejercer el gobierno, lo que hizo en un estilo corporativista, con un Poder Ejecutivo fuerte (en el que los cuadros militares tuvieron una presencia bien visible), que tomaba sus decisiones en vinculación con los representantes de los principales grupos de interés, en especial los obreros, los empresarios y la Iglesia. Sin dudas eso significaba que el centro de gravedad dejaba de estar en los partidos políticos y en el parlamento, pero fue, de todos modos, un corporativismo moderado, que no significó cambios formales ni en las atribuciones del Congreso ni en los derechos cívicos asociados al voto.

En 1949, Perón aprovechó para promover una reforma de la Constitución. En las elecciones convocadas a tal fin sus convencionales obtuvieron de nuevo la mayoría absoluta y los de la oposición decidieron retirarse de los debates: la redacción del nuevo texto quedó en manos exclusivamente peronistas. Contrariamente a los temores de muchos, no aprovecharon para dictar una constitución corporativista: el núcleo liberal de la de 1853 continuó en su sitio, aunque algunas de sus previsiones contramayoritarias fueron atenuadas. El nuevo texto disponía el voto directo de los senadores y también del presidente y vice, para los que se habilitaba la reelección indefinida. La reforma estableció la promoción de la «justicia social» como uno de los objetivos del Estado e incorporó una serie de derechos sociales con rango constitucional, entre ellos, recibir una retribución justa por el trabajo y acceder a una vivienda digna, al esparcimiento, a la seguridad social y a la salud. También dispuso la propiedad nacional de los recursos del subsuelo.

El gobierno de Perón introdujo reformas que afectaron hondamente las relaciones sociales. Tal como venía sucediendo en los Estados Unidos del *New Deal*, el Estado amplió su injerencia directa en la economía. Como en Francia o Gran Bretaña, se avanzó también en la nacionalización de algunos de sus resortes fundamentales, como el gas, los puertos, los teléfonos, los ferrocarriles y parte de la provisión de electricidad. Poco antes de que

asumiera, el gobierno militar había nacionalizado además el Banco Central y creado el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI), una pieza central de la política económica peronista. El IAPI compraba directamente a los productores los granos, carnes y otros bienes primarios y los vendía luego a compradores del exterior. Con eso desacoplaba el precio local del internacional, lo que dejaba una ganancia menor para los productores, pero contribuía a abaratar los productos para los consumidores argentinos. Los excedentes que el Estado obtenía los canalizaba hacia la promoción de otras ramas de la economía, fundamentalmente las manufactureras. Esos recursos, sumados a los excedentes comerciales excepcionales que habían quedado en las arcas argentinas durante la Segunda Guerra y a la profundización del proteccionismo aduanero, dieron a la industria sustitutiva, que ya venía creciendo aceleradamente, un impulso fundamental. También se utilizaron para saldar la deuda externa que el país arrastraba desde hacía décadas. Durante estos años, la Argentina experimentó el período de más rápida expansión industrial de su historia.

Esas y otras medidas impactaron directamente en los niveles de empleo y salariales, que tuvieron un crecimiento sostenido. Los salarios reales para trabajadores urbanos crecieron un 60% entre 1945 y 1949, lo que les permitió acceder a consumos que ya no fueron los estrictamente necesarios para sobrevivir. Como en un círculo virtuoso —al menos así funcionó en los primeros años— los mejores ingresos se traducían en más consumo, que alimentaba el crecimiento industrial, sobre todo de pequeñas y medianas empresas, que a su vez generaba más empleo y mejores salarios. Las exportaciones de productos manufacturados a países limítrofes, sin embargo, retrocedieron por efecto de las políticas comerciales de Estados Unidos, orientadas deliberadamente a castigar a la Argentina por haber sostenido la neutralidad en la guerra (también consiguieron complicar las ventas de cereales a Europa). Así, el notorio crecimiento industrial de estos años se orientó casi exclusivamente al mercado interno.

El Estado, además, asumió un papel mucho más activo en la promoción del bienestar. El congelamiento de los alquileres llevó alivio a los inquilinos, y extensos planes de construcción de viviendas para trabajadores y créditos baratos convirtieron a muchos en propietarios (a pesar de lo cual, por el intenso flujo de migrantes internos, se multiplicaron las «villas miseria» en el área metropolitana de Buenos Aires). Las pensiones por edad o discapacidad experimentaron una expansión sin precedentes, al tiempo que

el número de personas con cobertura de seguridad social pasó de 1,4 a 2,5 millones entre 1945 y 1950.

La creación del Ministerio de Salud en 1949 y la acción decidida del ministro Ramón Carrillo llevaron más servicios hospitalarios, campañas de sanidad y vacunación a todo el país. El acceso a la educación continuó ampliándose y dio un salto muy importante en el nivel secundario y luego en la universidad, a la que comenzaron a acceder con mayor frecuencia personas de origen trabajador (en parte, gracias a la abolición de los aranceles).

Con mayores derechos y mejores salarios, las clases populares gozaron de más tiempo libre, que alimentó diversos modos de entretenimiento y expresiones culturales, incluyendo algunas fomentadas directamente por el gobierno. Por promoción estatal y de los propios sindicatos, que fundaron colonias y hoteles, creció de manera exponencial el acceso al turismo: el tradicional balneario de Mar del Plata, que en 1940 recibió 380.000 veraneantes, tuvo que hacer lugar a más de 1.400.000 en 1955.

En fin, la clase trabajadora vivió el momento de mayor bienestar de su historia y la sociedad se volvió menos desigual: la proporción del ingreso total del país que quedó en manos de los asalariados pasó del 37% al 47% en 1950. Visualizadas como efecto de un proceso político del que las clases bajas eran también protagonistas, todas estas mejoras contribuyeron a un cambio relevante en el modo en que se imaginó desde entonces la ciudadanía: ya no se trataba solamente de tener el derecho a votar, sino también a acceder a un mínimo de bienestar.

El peronismo también trajo cambios significativos en las relaciones de género. La participación de las mujeres de clases populares se había hecho evidente ya en la campaña de 1946, cuando tuvieron la osadía de cantar «Sin corpiño y sin calzón/ Somos todas de Perón». En 1947, el Congreso finalmente convirtió en ley el voto femenino.

Evita, esposa de Perón, ocupó un lugar central en la iniciativa del voto femenino (para disgusto de las activistas del feminismo, cuyas luchas de años fueron poco y nada reconocidas). Desde el comienzo había asumido un interés por participar en el gobierno muy poco habitual en las primeras damas. Su carrera fue meteórica. En julio de 1948 organizó ella misma la Fundación Eva Perón, una estructura paraestatal de gran envergadura, con la que consiguió llevar ayuda social a los más humildes en todos los rincones del país, desde remedios, anteojos y regalos para niños, hasta la

construcción de escuelas, viviendas, hospitales y proveedurías. Por sus propios orígenes humildes se identificó con los más pobres, se transformó en la principal aliada de la CGT en el gobierno y fustigó a los opositores y a la «oligarquía» con más furia que el propio Perón. Pero, al mismo tiempo, se esforzó por quitar a su actuación toda connotación política: su figura fue asumiendo un halo maternal y espiritual, alejado de lo que ella misma llamaba la «politiquería». Así y todo, dos años más tarde fundaría el Partido Peronista Femenino (PPF), la tercera rama que terminaría de conformar la peculiar estructura tripartita del justicialismo, que ya contaba con alas política y sindical. La nueva agrupación fue enteramente compuesta por mujeres y se mantuvo celosa de su independencia.

Las primeras elecciones en las que participaron las mujeres fueron las presidenciales de 1951. Para entonces, Evita se había transformado en una líder popular de la talla del propio presidente y una de las más destacadas del mundo. Su candidatura a la vicepresidencia parecía obvia: para ello trabajaba el PPF y así lo reclamó la CGT en el célebre «cabildo abierto» del 22 de agosto de ese año, una concentración de más de un millón de personas en la avenida 9 de Julio, la manifestación más grande hasta entonces y por mucho tiempo más. Por oposición de las Fuerzas Armadas, finalmente Evita no pudo ser candidata, pero sí lo fueron las representantes del PPF, que se alzaron con 23 bancas en la Cámara de Diputados, 6 en la de Senadores y otras 77 en las legislaturas provinciales. Era la primera vez que mujeres accedían a cargos de esa importancia y solo disfrutaron de ese honor las peronistas: la UCR no postuló a nadie de sexo femenino, mientras que los otros partidos lo hicieron en posiciones en las que no podían resultar electas. El número de legisladoras que llegó a haber en 1955 fue incluso mayor, colocando a la Argentina por delante, en este aspecto, de la mayoría de los países más avanzados (tras la caída de Perón, la proporción de mujeres entre los legisladores solo se igualaría en 1999 gracias a la Ley de Cupos).

Enferma de cáncer, Evita falleció el 26 de julio de 1952, a la edad de 33 años. Su velatorio fue el más largo y masivo de la historia argentina. Su breve paso por la política dejó una marca duradera en las relaciones de género. Aunque el discurso oficial tuviera notas conservadoras que parecían reforzar los estereotipos tradicionales —la maternidad como deber, el papel «asistencial» antes que político, la obediencia al líder varón— no caben dudas de que la mera aparición de una dirigente como Evita y la

participación de las mujeres en el movimiento debilitaron las pautas patriarcales que imperaban hasta entonces. Los años del peronismo significaron además una afirmación de la mujer en otros aspectos. Por una parte, se igualaron los derechos de los hijos «ilegítimos» respecto de los concebidos en el seno de matrimonios legalmente constituidos, medida que reparaba un estigma que afectaban particularmente a mujeres y niños de las clases populares. Por la otra, hacia el final del segundo mandato de Perón se hicieron avances conducentes a la legalización del divorcio vincular (una mejora que quedaría trunca por presión de la Iglesia).

El gobierno de Perón también trajo cambios —más bien modestos y ambivalentes— en las relaciones entre el Estado y los pueblos originarios. En 1916 se había creado una Honorable Comisión de Reducción de Indios que —se suponía— se ocuparía de su bienestar; pero el desinterés era tal que solo en 1927 fue reglamentada y ni siquiera entonces tuvo un papel apreciable. En tiempos de Perón, la Comisión de *Reducción* fue red denominada Dirección de *Protección* al Aborigen y recibió mayores atribuciones. El Estado entregó por primera vez documentos de identidad a indígenas de varias comunidades, lo que, junto con la provincialización de la mayoría de los Territorios nacionales, los sumaba como ciudadanos (un derecho al que, en la práctica, accedieron todavía desigualmente).

Algunos gestos amistosos del nuevo mandatario animaron en 1946 una asombrosa acción política protagonizada por el pueblo kolla, el «Malón de la Paz», una larga marcha que 174 de ellos llevaron adelante a pie, desde Salta y Jujuy hasta Buenos Aires, para reclamar la devolución de sus tierras ancestrales. Inicialmente alentada por el gobierno, la acción fue todo un éxito: despertó simpatías en su paso por medio país, concitó la atención de la prensa y tuvo una recepción triunfal cuando finalmente arribó a Plaza de Mayo. Perón los recibió en la casa de gobierno, prometió atender sus demandas y se abrazó con algunos de ellos frente a la multitud en el histórico balcón. Se trató de un símbolo inédito de reconocimiento: parecía que los pobladores originarios finalmente eran aceptados en la mesa nacional.

Pero la acción de los kolla marcó también los límites del compromiso del gobierno con las demandas populares. En su paso por la pampa húmeda, habían dado a los chacareros la idea de replicar su marcha para pedir ellos también que Perón cumpliera con la promesa de la reforma agraria, algo mucho más difícil de satisfacer que el pedido de un puñado de comunidades nortenas. Eso preocupó al gobierno, que no quería habilitar demandas que

luego no pudiera satisfacer. Finalmente, los enviados kolla, que no querían irse de Buenos Aires con una mera promesa, fueron conducidos por la policía, entre golpes y gases lacrimógenos, a un tren precintado que los llevó de vuelta a la Puna.

El Malón de la Paz se convertiría en uno de los primeros hitos del movimiento indigenista en la Argentina, al instalar por primera vez en la agenda pública los problemas de los pueblos originarios. Sin embargo, en lo inmediato, la ilegal y violenta expulsión de los kollas, que quedó impune, sentó un precedente sombrío.

En octubre de 1947, en Formosa, el pueblo pilagá fue víctima de una de las peores masacres del siglo XX. Un grupo de ellos, famélico luego de regresar a pie de su tradicional peregrinación a los ingenios azucareros de Salta, donde no habían podido conchabarse, solicitó ayuda a las autoridades y la atención personal de Perón. El gobierno nacional envió un convoy con alimentos, que llegaron tarde y podridos. Desesperados, los pilagá los consumieron de todos modos y unos cincuenta de ellos murieron intoxicados. Mientras tanto, en el pueblo de Las Lomitas comenzó a circular el rumor de que los indignados indígenas se disponían a atacar a la población blanca. En respuesta, sin motivo aparente, la Gendarmería ametralló al contingente. Más de trescientos pilagá cayeron muertos allí mismo; otros intentaron escapar, pero hubo una verdadera cacería de sobrevivientes. La Gendarmería los persiguió por kilómetros y dio muerte a otros doscientos. Cuando terminó la matanza, entre muertos y desaparecidos el número total de víctimas había llegado a unas setecientas cincuenta, muchos de ellos niños, mujeres y ancianos. Los periódicos colaboraron minimizando el incidente (reportaron «alrededor de cuatro muertes») y afirmando que los pilagá habían atacado Las Lomitas, lo que era falso. Perón nunca ordenó ninguna investigación.

Cultura y política en la era peronista

La visión que orientó a Perón en su gobierno giró en torno de la doctrina de la «tercera posición»: colocarse en el justo medio entre los abusos del individualismo capitalista y el colectivismo comunista (lo que debía reflejarse en una política internacional distante tanto del bloque soviético como del imperialismo estadounidense). El Estado debía asumir un papel rector para arribar a una «comunidad organizada», en la que cada clase

desempeñara su función armónicamente y sin antagonismos con las demás; esto suponía una mayor solidaridad por parte de los de arriba, la disposición al trabajo ordenado por parte de los de abajo y una mayor sujeción de todos a las decisiones estatales (que se tradujo, por ejemplo, en la virtual eliminación de la autonomía de las universidades, que sufrieron intromisiones severas).

Durante estos años se desplegó un poderoso aparato de propaganda que difundió las imágenes, las ideas y las palabras del primer mandatario y de su esposa a lo largo y a lo ancho de todo el país. Se produjeron a cuenta del Estado millones de afiches callejeros, prendedores, banderas y escudos peronistas, folletos y retratos para distribuir. Hubo una intensa programación radial y de cortos en los cines (a los que desde 1951 se sumó la televisión estatal). Se programaron festivales musicales y obras de teatro de contenido oficialista, y hubo supervisión de los guiones de los filmes nacionales. El gobierno sostuvo una prensa acólita y ejerció presiones sobre la que no lo era (algunos diarios fueron clausurados y, en 1951, *La Prensa* fue expropiado y entregado a la CGT). Junto con todo esto se implementó una liturgia de manifestaciones callejeras en apoyo al oficialismo. Sus eventos principales fueron el Día de la Lealtad cada 17 de octubre y la movilización por el tradicional 1º de Mayo, resignificado como Fiesta del Trabajo. Los discursos de Perón y Evita, la «Marcha peronista» y las pancartas y la decoración que exaltaban a los líderes fueron infaltables.

A través de esta prédica se fue construyendo un verdadero culto a la personalidad. Perón y Evita se presentaron no solo como líderes políticos, sino como encarnación del pueblo argentino y, por ello, de la nación. El peronismo adquirió así un tono plebiscitario más marcado que el que había tenido el yrigoyenismo: cada elección se planteó como si la alternativa fuese defender a la nación (votando al peronismo) o apoyar a los «contreras», a quienes se consideraba antipatrióticos y, por ello, sin legitimidad alguna. Estar contra Perón era estar en contra del pueblo trabajador y de la Argentina. La prédica no fue impulsada solamente desde arriba. Como las clases populares habían conseguido convertirse en un sujeto político gracias al movimiento, era esperable que sintieran que lo popular estaba indisociablemente ligado a Perón. Y como en estos años la presencia del Estado se hizo sentir por primera vez en la realidad de muchos habitantes de clases bajas, especialmente en las regiones periféricas, es posible que la propia estatalidad fuese para mucha gente indistinguible de las figuras de

Perón y Evita. El lazo de unión que las clases populares entablaron entre sí y con los líderes del movimiento alcanzó una intensidad afectiva poderosa y perdurable.

La prédica del Estado fue en estos años fuertemente nacionalista y antiimperialista. Pero no fue un nacionalismo xenófobo o elitista, como el de algunos grupos de derecha. De hecho, acaso para quitarse de encima el mote de «nazifascista» que le endilgaba la oposición, Perón fue particularmente benevolente con la colectividad judía y, en 1949, la Argentina estuvo entre los primeros países del mundo en reconocer al Estado de Israel. Tampoco rechazó el panteón de próceres que había instalado Mitre ni adoptó el culto a Rosas que venían proponiendo los intelectuales revisionistas, a los que no se les dio cabida (algunos habían ingresado al movimiento, otros fueron opositores).

Se trató más bien de un nacionalismo popular, parecido al que había cultivado el grupo FORJA, que se había disuelto e incorporado en su mayoría al peronismo. La grandeza nacional se asoció a la reivindicación de la dignidad del trabajador, que fue la figura emblemática de la Nueva Argentina que Perón decía estar construyendo. A la oligarquía se la fustigó por su pasado de grupo explotador, parasitario y extranjerizante, pero al mismo tiempo se propuso como perfectamente posible su reeducación moral y su reintegración en la comunidad organizada. En ese clasismo no antagonista, el discurso peronista se conectaba bastante con los valores y visiones que ofrecía la cultura de masas de las décadas anteriores. En los hechos, el peronismo no aportó modificaciones decisivas en ese plano: más bien se apoyó en ella y explotó sus potencialidades políticas. Entre otras cosas, Perón buscó asociarse todo lo posible a la figura del gaucho, y era habitual que utilizara referencias al *Martín Fierro* en sus discursos.

La tónica del mensaje de Perón osciló entre la crítica a los ricos y las promesas de armonía de clases. La tarea de dignificación del trabajador no tenía que ver, como en las visiones izquierdistas, con eliminar las jerarquías sociales, sino más bien con franquearle el acceso al bienestar y la respetabilidad de los que solo la gente acomodada había gozado hasta entonces. Pero más allá de la voluntad de Perón, hubo en estos años expresiones de antagonismo y una reivindicación de lo plebeyo que resultarían bastante disruptivas para esos ideales de armonía. Nada grafica mejor esa tensión que la letra de la «Marcha peronista», que conservó la

frase «combatiendo el capital» procedente de la canción previa de una agrupación obrera que fue su inspiración, algo que incomodaba a Perón.

Incluso sin proponérselo sus líderes, la irrupción del peronismo afectó también las jerarquías sociales y algunos de los valores que las élites venían inculcando desde el siglo XIX. Las masas aportaron al movimiento una serie de rasgos plebeyos que no habían estado presentes hasta entonces en la política argentina. De pronto, todo aquello que había sido invisibilizado, silenciado o reprimido por la cultura dominante se había hecho presente y, para colmo, se había vuelto político.

El 17 de octubre de 1945, los hombres y mujeres pobres que vivían en los márgenes de la coqueta Buenos Aires habían invadido la ciudad. Llegaron con sus ropas pobres y sus modales groseros y, contra todas las reglas de urbanidad, retozaron en las plazas con sus cuerpos sudorosos a la vista de todos y refrescaron sus pies en el agua de las fuentes. El mero hecho de ocupar la Plaza de Mayo y otras zonas céntricas con sus humanidades pobres y despreciadas se convirtió para ellos en un gesto político.

La misma actitud desafiante se reiteró con otras normas de respetabilidad y «decencia» dominantes. Durante años, los pobres habían tenido que escuchar sermones sobre la limpieza y la forma correcta de vestir; una tras otra habían padecido las imágenes de la publicidad, que reflejaban cuerpos y ropas que no eran ni podían ser los suyos. Tras los sucesos del 17 de octubre, los antiperonistas señalaron la vestimenta de algunos de los manifestantes como signo de su bajeza y empezaron a hablar con desprecio de esos «descamisados» que habían desfilado por la ciudad. Pero rápidamente los peronistas recuperaron esa expresión y le otorgaron un sentido positivo. La falta de esa prenda se convirtió en un símbolo del carácter verdaderamente popular del movimiento. Perón mismo se referiría afectuosamente a sus seguidores como sus «descamisados» e incluso el ser una «chusma maloliente» fue asumido con orgullo por algunos peronistas, como el poeta Juan Oscar Ponferrada. «Mis grasitas»: la recordada manera en que Evita se dirigía a los más humildes también invertía el insulto común, para convertirlo en un desafío político contra la «limpieza» de los que los despreciaban.

La educación también fue terreno de este tipo de disputas. Durante el año 1945, estudiantes, académicos e intelectuales, desde el lugar de autoridad que les daba el saber, se pronunciaron contra Perón, a quien acusaron de manipular a sus seguidores aprovechándose de su «incultura». En respuesta a

esta actitud, algunos peronistas corearon entonces el famoso «Alpargatas sí, libros no». Durante la jornada del 17 de octubre, en La Plata y en Córdoba hubo manifestaciones de hostilidad hacia la universidad. En los años siguientes, en el peronismo habría otras muestras de antiintelectualismo.

Los ideales de decencia también fueron puestos en cuestión en alguna medida. Los jóvenes peronistas colmaron el movimiento de ese espíritu festivo, irreverente y soez que desde entonces le fue tan típico, resaltado por el sonido carnavalesco de los bombos en las manifestaciones. ¿Y qué decir del lugar que fue adquiriendo Evita, hija ilegítima, actriz (una profesión nada «decente» por entonces) y que para colmo convivió con Perón sin estar casados? Su mera presencia fue una fuente constante de impugnación de los valores tradicionales y, por ello, de irritación de unos y admiración de otros.

La plebe también politizó con sus gestos la cuestión del origen étnico y el color de piel. De pronto se escuchó hablar en «quichua o guaraní» en la europea ciudad porteña, como notó con asombro el diario *Clarín* en 1945, o aparecía un «malón» kolla venido del norte. «Cabecitas negras», les decía con desprecio la gente «decente» a todas estas presencias inesperadas y, por extensión, a todos los peronistas. Estos, sin embargo, no reivindicaron por ahora lo moreno ni mucho menos aceptaron ser identificados como «cabecitas» (eso solo llegaría luego de 1955).

La afirmación de los argentinos y argentinas que no se reconocían en la imagen de la Argentina blanca y europea dejó rastros interesantes en el plano de la cultura popular y masiva, en el que ya antes se habían presentado visiones sobre el pueblo nacional en disidencia implícita con las oficiales. Un ejemplo interesante se encuentra en la música. El tango, que poco antes había alcanzado su edad de oro, comenzó a fines de los años cuarenta una fase de lenta decadencia, mientras otros ritmos de tono más festivo ganaban el favor de las masas. Alberto Castillo, por ejemplo, alcanzó su máxima popularidad luego de 1944 incorporando candombes a su repertorio, con letras que hacían constante referencia a «los negros». Otro ritmo que ganó enorme popularidad entre las clases bajas fue el chamamé. El mendocino Antonio Tormo batió todos los récords de ventas en 1950 con su simple «El rancho 'e la Cambicha» (en verdad, un rasguido doble, pero él lo llamaba «chamamé»), cuya letra incluía palabras en quechua y guaraní y referencias a la vida de los sectores populares litoraleños. En un tono más melancólico, el folklore siguió dando lugar a figuras como Atahualpa Yupanqui o

Buenaventura Luna, cuyas composiciones hablaban de los sufrimientos de las «razas viejas» y de los mestizos.

Desde el gobierno no hubo en estos años una reivindicación explícita de lo moreno (aunque sí de lo criollo): para el ideal de armonía y homogeneidad nacional que promovía Perón, resultaba inconveniente plantear de manera explícita que hubiera diferencias de origen o de color entre los argentinos. Sin embargo, la cuestión sí apareció a veces tematizada de manera implícita en el modo en que el Estado representó visualmente al pueblo. En algunos afiches oficiales —la minoría— los cuerpos que lo encarnaban tenían un aspecto deliberadamente mestizo y circuló también una versión del escudo peronista en la que la mano de abajo estaba pintada en un tono amarronado y la de arriba rosáceo (como queriendo significar que la solidaridad de clase esperada debía ser también una fraternidad interétnica).

De este modo, la época peronista produjo directa o indirectamente una reivindicación de lo culturalmente plebeyo, que obtuvo carta de legitimidad en la vida política. Debe decirse, sin embargo, que el Estado bajo Perón siguió fomentando al mismo tiempo ideales de respetabilidad similares en más de un sentido a los que la élite había instalado en épocas anteriores y que se basaron en el trabajo y la disciplina, la pulcritud en el vestir, la educación, la moralidad tradicional, la sumisión de la mujer al varón, etcétera. De hecho, en estos años el Estado presionó con cierto éxito para que las pautas de vida familiar y de sexualidad del mundo popular, siempre menos «ordenadas» que las burguesas, se acercaran a ellas (lo que incluyó, entre otras cosas, un marcado recrudescimiento de la represión policial contra la homosexualidad masculina). El componente «herético» del peronismo —la reivindicación de lo plebeyo y el desafío a los valores tradicionales— convivió en tensión con estos elementos más conservadores.

El antiperonismo y la «clase media»

Por el arraigo que tuvo entre los votantes, por la intensidad emotiva que despertó entre las clases bajas, por sus rasgos plebeyos y por varias de las medidas que propició, el peronismo produjo un sismo en el sistema político. Desde su surgimiento atrajo e incorporó a dirigentes y votantes de todos los orígenes —desde anarquistas y socialistas hasta radicales y conservadores— y produjo un realineamiento de las demás fuerzas.

Tras la derrota de 1946, la Unión Democrática se disolvió y la UCR entró en una profunda crisis interna. Los liberal-conservadores se desbandaron y perdieron presencia nacional (incluso en algunas de las provincias que habían sido sus bastiones). El PS y PDP sufrieron una sangría de su base votante que los volvió virtualmente irrelevantes. El comunismo fue perdiendo lentamente la adhesión que había conseguido entre los obreros. El campo del nacionalismo de derecha quedó partido entre quienes apoyaron a Perón y quienes lo aborrecieron. El eje central de la política nacional dejó de ser el que oponía a los radicales y los liberal-conservadores, para pasar a ser ahora el que enfrentaba a peronistas y antiperonistas. A pesar de su crisis interna, la UCR se convirtió en la primera opción de los segundos, lo que llevó para su molino una buena cantidad de los votos que los otros partidos perdían.

Aunque en 1946 el antiperonismo había quedado políticamente desorganizado, la fuerza que ya para entonces había ganado como reacción social y cultural persistió y se profundizó, hasta transformarlo en una identidad política tan arraigada e influyente como la del propio peronismo. De hecho, ninguna de las dos se entiende sin la otra: articulado ya en 1945, *antes* de que el peronismo hubiese adquirido una forma precisa, el antiperonismo contribuyó decisivamente a imprimirle al nuevo movimiento algunos de sus rasgos específicos. Las críticas que había planteado frente al ascenso del coronel ese año apuntaban al peligro de que fuese un «nazifascista», pero también a otros aspectos del líder y, más importante, de sus seguidores.

Gran parte de la furiosa reacción antiperonista tuvo que ver más con el disgusto por el debilitamiento de las normas culturales y las jerarquías sociales que con el hecho de que se lesionara algún interés puramente económico. Quienes atacaban a Perón con frecuencia aludían en sus críticas a cuestiones de «buena educación», raciales o incluso morales y estéticas. El diario *Crítica*, por ejemplo, se quejó en 1945 por la plebe en las calles porteñas, un atentado contra «el buen gusto y contra la estética ciudadana afeada por su presencia». Para el conservador Adolfo Mugica, el país vivía como en una especie de «inmensa merienda de negros». El nacionalista Juan Carulla coincidía: al contemplar las manifestaciones, «compuestas, en su gran mayoría, de mestizos y aun de indios», lamentó que la Argentina «se negrea». Tiempo después, un dirigente radical acuñó la famosa expresión «aluvión zoológico» para referirse a ellos como si fueran animales. Hasta el

Partido Comunista salió a descalificar a los «maleantes y hampones» del «malevaje peronista» que atentaban «contra el hogar, contra las casas de comercio, contra el pudor y la honestidad, contra la decencia, contra la cultura».

La catarata de desprecio contra las clases bajas en estos años fue tan enorme que recuerda la que la élite lanzó en el siglo XIX cuando se dispuso a «civilizar» el país. Y no es casual: en ambos casos la piedra en el zapato era la plebe actuando por fuera de los carriles aceptables. Américo Ghioldi, uno de los dirigentes más importantes del PS, retomó la dicotomía sarmientina de «civilización o barbarie» para llamar a combatir esa «fuerza primitiva» que se había hecho visible, ese nuevo «caudillo de la guerra civil» como la que habían animado los antiguos federales. Si el peronismo acentuó luego su veta más plebeya y antiintelectualista, si se identificó más tarde con los «cabecitas negras» y, mucho después, con la prédica de los revisionistas, fue en parte como reacción a estos desprecios.

A su vez, la pretensión de Perón de encarnar la voluntad del pueblo trabajador y, por ello, de la nación argentina, influyó de vuelta en los rasgos que asumió la identidad antiperonista luego de la derrota de 1946. Hasta octubre del año previo, los antiperonistas habían vivido en la certeza de representar a la totalidad de la sociedad, incluyendo a los trabajadores. La masividad de las manifestaciones callejeras que protagonizaron y el hecho de tener incluso a los comunistas de su lado contribuía a esa convicción. Respecto de los que apoyaban al coronel, supusieron que se trataba apenas de un puñado de malvivientes arreados para la ocasión. El movimiento del 17 de octubre sembró dudas en esas certezas, que luego fueron confirmadas por su derrota en las elecciones. Las «fuerzas vivas», los intelectuales, los elencos políticos tradicionales enfrentaron una incómoda evidencia: más de la mitad de los votantes y la abrumadora mayoría de las clases bajas les habían dado la espalda. El pueblo argentino se les apareció desde entonces partido en dos mitades, una sana, la otra despreciable.

Frente a esa amarga comprobación, y a la vez como modo de afirmar su legitimidad ante un gobierno que los consideraba un puñado de oligarcas antipatrióticos sin ningún arraigo social, los antiperonistas se aferraron a un modo de identificación que hasta entonces tenía poca presencia en la sociedad argentina: se proclamaron representantes de la «clase media». Eso significó un cambio trascendente en el modo en que el país se imaginaba a sí mismo. Todavía a comienzos del siglo XX, la cultura argentina solo

reconocía dos grandes agrupamientos sociales: la «gente decente» y el pueblo. No se concebía por entonces que el pueblo estuviese partido en clases diferentes.

Ese panorama fue cambiando lentamente luego de 1919, año en que por primera vez se puso en circulación en los debates públicos la expresión «clase media», hasta ese momento poco frecuente en el vocabulario de los argentinos. Era un contexto muy particular. La Semana Trágica acababa de conmover hasta sus cimientos el orden social y había dejado en claro que los obreros revoltosos gozaban de una fuerte simpatía en una porción de los sectores medios. Frente a esa evidencia, algunos intelectuales y políticos de derecha se propusieron instigar un orgullo de «clase media» como modo de debilitar las solidaridades populares. Tomaron la expresión de los debates europeos, en los se la utilizaba con la misma finalidad. Trataron de convencer así a los empleados de que formaban parte de una clase diferente, más respetable que la integrada por los trabajadores manuales, y que no debían confundirse con ellos en los mismos reclamos.

Por entonces, sin embargo, la idea no había prendido. La imagen que la mayoría de los argentinos tenía sobre la sociedad en la que vivía siguió siendo más bien binaria: por un lado el pueblo, por el otro, la oligarquía. Fue la irrupción del peronismo lo que finalmente creó los incentivos e impulsos para que una sección de ese pueblo pasara a imaginarse como una clase intermedia entre los más humildes y la clase alta. Había muchos motivos por los que una persona de sectores medios podía sentirse ofendida. La reivindicación del trabajador, el nuevo valor que adquirió lo plebeyo, la afirmación de lo mestizo y lo moreno, las mejoras que se brindaban colectivamente a todo un gremio sin importar si, individualmente, sus miembros lo merecían o se lo hubiesen ganado... Presentarse como «clase media» servía para trazar una frontera de distinción respecto de esa masa trabajadora peronista a la que se despreciaba por su incultura y a veces también por su origen étnico. Y a su vez ayudaba a desmarcarse de ese puñado de oligarcas al que Perón fustigaba: proclamarse de «clase media» permitía ser antiperonista y a la vez reclamar un lugar de legitimidad en la mesa nacional, que era precisamente lo que el gobierno escamoteaba a los opositores.

La prensa y los activistas antiperonistas insistieron mucho, luego de 1946, para convocar a una «clase media» a la acción y dotarla de un sentido de orgullo y de la misión de poner fin al peronismo. Se destacaron en este

sentido referentes y organizaciones ligados a la Iglesia, la Acción Católica en particular. Así, en estos años una porción importante de la población comenzó a identificarse como «clase media». Fue por entonces una identidad que reclamó para sí un lugar de superioridad cultural y moral respecto de la plebe peronista, a la que imaginó inculta, envilecida, atrasada, irracional. Las personas que se creían «de clase media» con frecuencia invocaron nociones de merecimiento personal asociadas a la virtud y al trabajo esforzado, a su vez conectadas con historias de abnegados abuelos inmigrantes que habían progresado por mérito propio, sin dádivas de ningún gobernante. De manera sutil, esa marca étnica —el ser descendientes de europeos— quedaba contrapuesta al carácter mestizo de los «cabecitas negras» peronistas, una raigambre que supuestamente explicaba sus limitaciones morales e intelectuales.

Y a su vez, todas esas narrativas individuales y familiares de merecimiento y de ascenso a través del esfuerzo se conectaban con los relatos sobre la Argentina que habían propuesto las élites desde tiempos de la organización nacional. Ya que, como habían planteado Alberdi o Sarmiento, todo lo «civilizado» había venido por aporte europeo y todo lo bárbaro era rémora del legado criollo, entonces los descendientes de inmigrantes se pensaron a sí mismos como baluartes de la civilización y de la modernidad, luchando también ellos contra las fuerzas del atraso que permanecían agazapadas entre la población de clase baja y mestiza y que habían resurgido en la hora actual, como decía Ghioldi.

La identidad *política* antiperonista quedó así fuertemente asociada a una identidad *social* —la de «clase media»— y ambas a una peculiar narrativa acerca de la historia nacional, que imaginaba el peronismo como una manifestación de la antigua barbarie que emanaba de la inferioridad étnica y cultural de las clases bajas (especialmente las del atrasado interior, de donde habían llegado los viejos caudillos y sus montoneras y de donde llegaban por entonces los «cabecitas negras»). La «clase media», corazón de la Argentina moderna, racional, europea, se sintió llamada a ocupar el lugar central en la vida nacional que el peronismo asignaba, en cambio, insólitamente, a un bajo pueblo tan defectuoso. Desde esta visión —lo mismo que desde la que había planteado Sarmiento, de la que era heredera— el país quedaba irremediabilmente partido en dos mitades difícilmente reconciliables.

El segundo gobierno de Perón y el golpe de 1955

Afianzado en esa poderosa identidad social, el antiperonismo fue encontrando los caminos para recuperar la iniciativa luego del fiasco de 1946. El terreno electoral no le fue propicio: en 1951 el primer mandatario resultó reelecto por más del 63% de los votos. Irónicamente, serían la Iglesia y el Ejército, dos de los apoyos fundamentales en la carrera política de Perón, los que aglutinarían de nuevo un poderoso frente en su contra.

A partir de 1949, la economía había comenzado a experimentar dificultades. La transferencia de recursos del campo a la ciudad produjo una caída en la producción agraria y su descapitalización. Se sumó el efecto de las políticas comerciales estadounidenses y europeas, que privilegiaron ahora a sus propios agricultores o directamente excluyeron al país como proveedor. La creciente industria liviana necesitaba cada vez más insumos importados. Como no estaba en condiciones de exportar (por sus propias limitaciones, pero también por las sanciones comerciales que Estados Unidos aplicaba contra la Argentina), las divisas necesarias para traerlos solo podían provenir del sector rural, ahora estancado. Al mismo tiempo, los niveles de inflación subieron de manera preocupante y, con ellos, los síntomas de descontento. Frente a esta situación, Perón lanzó su Segundo Plan Quinquenal con un programa que privilegiaba la inversión, el agro y la industria pesada por sobre los objetivos de expansión del consumo y de «justicia social» típicos de la primera presidencia. El Plan significó que habría una menor receptividad a las demandas de aumento salarial y una exigencia de mayor productividad y disciplina laboral. Pero, en contra de esa expectativa, las penurias económicas reactivaron las luchas sindicales, y desde 1950 hubo una nueva ola de huelgas, algunas de ellas violentas y decretadas a espaldas de las conducciones sindicales que respondían a Perón. El gobierno adoptó, frente a algunas de ellas, una actitud represiva.

En 1952, la crisis alcanzó su peor pico, con una inflación récord del 38% anual y el desabastecimiento de productos básicos. Para lidiar con la situación, el gobierno puso en marcha el Plan de Estabilización, que significó una profundización de la nueva política más ortodoxa. Los productores rurales fueron beneficiados con reducciones de impuestos y subsidios y se anunció un plan de facilidades para la radicación de capitales extranjeros. En un paso antes impensable, se volvieron a contraer empréstitos en el exterior y hubo acuerdos con compañías petroleras

norteamericanas para que invirtieran en el país, parte de una nueva política de acercamiento a los Estados Unidos. Al mismo tiempo, las negociaciones colectivas se dieron por suspendidas y se fijaron por decreto los índices salariales para los siguientes dos años, como modo de limitar los aumentos. En los hechos, el derecho de huelga fue suprimido.

Apenas lo peor de la crisis fue quedando atrás, los trabajadores se lanzaron a recuperar el terreno perdido. En varias fábricas los delegados gremiales lograron conseguir aumentos a pesar del congelamiento decretado y forzaron a sus sindicatos a convalidarlos. Este tipo de actividad enfureció a Perón, que en 1953 criticó fuertemente a las comisiones internas y les exigió que dejaran de actuar por su cuenta y se subordinaran a sus sindicatos. A pesar de estas advertencias, el año siguiente estuvo marcado por una explosión de conflictos laborales que puso en evidencia las limitaciones que tenía el gobierno a la hora de controlar el movimiento obrero. En este contexto, los empresarios exigieron la restauración de la disciplina y la moderación de las demandas. En marzo de 1955, Perón convocó a un gran Congreso de la Productividad, con la idea de que los sindicatos llegaran a un acuerdo con los empresarios en el sentido de lo que estos esperaban. El congreso, sin embargo, resultó un fracaso total. La CGT —que participó a regañadientes— resistió exitosamente el avance patronal.

A medida que las complicaciones se acumulaban, Perón fue adoptando un rumbo cada vez más autoritario. El control de la prensa se hizo más severo. Los dirigentes de la oposición sufrieron hostigamientos y algunos pasaron temporadas en prisión. El Estado llevó la propaganda oficial y el culto a la personalidad a niveles exorbitantes. La «doctrina peronista» fue materia de formación en las escuelas militares y se la impuso también a los empleados públicos. Los libros de lectura de la escuela primaria se llenaron de alabanzas a Perón y a Evita. Cuando en 1951 se decretó la provincialización de los Territorios nacionales del Chaco y de La Pampa, se los denominó respectivamente provincia Presidente Perón y provincia Eva Perón (también la ciudad de La Plata fue rebautizada con el nombre de la primera dama). Paralelamente, el gobierno hizo grandes esfuerzos para encuadrar en organizaciones gremiales de signo peronista a los sectores de la población que no participaban del movimiento obrero. Para los patrones, creó la Confederación General Económica (CGE), que consiguió algo de arraigo, especialmente en el interior del país. Para los profesionales y trabajadores intelectuales se estableció en 1953 la Confederación General de

Profesionales, fuertemente resistida por la mayor parte de esos sectores. Hubo iniciativas similares para estudiantes secundarios y universitarios. Peronizarlo todo parecía el mandato de la hora.

El giro autoritario generaba resquemores en diversos sectores. Posiblemente fuese menos alarmante entre las clases populares por su identificación con el peronismo, pero también porque las mieles de la libertad y las garantías republicanas no habían tenido para ellas una materialidad verdaderamente tangible en períodos anteriores. Diferente era el caso de los sectores medios y, por supuesto, de los altos, que en estos años acentuaron el rechazo que sentían por Perón y por todo lo que había venido de su mano. Incapaces de derrotarlo por medios democráticos, los antiperonistas fueron asumiendo una disposición cada vez más violenta.

En septiembre de 1951, sectores del Ejército intentaron realizar un golpe de Estado, que fue rápidamente desactivado. En abril de 1953, militantes juveniles opositores apelaron a métodos terroristas: colocaron bombas en ocasión de una manifestación obrera de apoyo a Perón, causando siete muertos y decenas de heridos. Los manifestantes enfurecidos incendiaron el aristocrático Jockey Club y destruyeron sedes del radicalismo, del socialismo y de los conservadores.

Finalmente, a fines de 1954, una situación inesperada permitió el rearme de la coalición antiperonista. Siguiendo lineamientos del Vaticano, la Iglesia se había lanzado por entonces a promover agrupaciones profesionales y políticas de signo católico, algo que conspiraba contra la voluntad de Perón de ser el conductor único de la sociedad. El presidente reaccionó entonces con discursos contra la Iglesia y promovió leyes y medidas que iban en contra de sus intereses (incluyendo el fin de la enseñanza de la religión en las escuelas públicas, que tanto había irritado a los antiperonistas). La jerarquía eclesiástica puso en movimiento el extenso aparato que respondía a ella en todo el país y llamó a la resistencia. En mayo de 1955 hubo enfervorizadas manifestaciones de católicos; por primera vez desde 1946 un movimiento político le disputaba la calle al peronismo. Los ánimos se caldearon cada vez más.

El 11 de junio, para la festividad de Corpus Christi, una multitud inédita desbordó la Catedral porteña y ocupó buena parte de la Plaza de Mayo. Una columna incluso se dirigió al Congreso apedreando edificios públicos y de diarios oficialistas al grito de «¡Muera Perón!» y «¡Viva Cristo Rey!». Cinco días después se produjo otro intento de golpe de Estado, en el que los

conspiradores de la Marina no vacilaron en utilizar sus aviones para bombardear a los partidarios del gobierno reunidos en Plaza de Mayo, dejando un saldo de más de trescientos cincuenta muertos. Como para muchos resultaba obvio que la manifestación de Corpus Christi había sido parte del plan militar, grupos peronistas incendiaron varias iglesias en represalia. La inédita quema de templos finalmente terminó de aglutinar a la totalidad del arco opositor: incluso políticos y agrupaciones estudiantiles tradicionalmente enfrentados con la Iglesia salieron en defensa del catolicismo ofendido.

A principios de julio, Perón intentó poner paños fríos con palabras conciliadoras, pero ya era demasiado tarde. Ante la perspectiva de un golpe de Estado, el movimiento obrero evaluó la posibilidad de crear milicias populares para defender al gobierno, lo que crispó aún más los ánimos de los militares. Sin embargo, Perón se ocupó de desactivar esta posibilidad llamando a la calma, lo que no lo privó de volver a lanzar amenazas verbales a la oposición, que había rechazado en bloque sus invitaciones a la reconciliación.

El 16 de septiembre de 1955 finalmente se inició en Córdoba el movimiento golpista, en cuyas acciones se sumaron también los llamados «comandos civiles», grupos irregulares de antiperonistas armados. Ante la evidencia de que había perdido apoyo de sus camaradas militares, al menos parte importante de ellos, y después de otro bombardeo, esta vez sobre Mar del Plata (con la amenaza de repetirlo en la capital), Perón prefirió refugiarse en Paraguay sin ofrecer resistencia. Así terminó el gobierno peronista.

El movimiento, sin embargo, estaba lejos de haberse apagado.